

brasil entre dos fuegos

Los actos políticos no pueden juzgarse como estáticos sino dentro de su propio dinamismo. Luchar contra el comunismo está bien, pero emplear medios que no consiguen sino reforzar determinados resentimientos, caldo propicio para el mismo comunismo, es dar idea de que no se ha extendido el principio fundamental de la ideología marxista.

Según las noticias que han ido llegando a la actitud revolucionaria de Goulart, aprovechada por el comunismo, las derechas han contestado con un movimiento de neto tipo militar, aplaudido inmediatamente por el presidente Johnson, y que ha establecido normas de acción por encima de la Constitución de 1946 a la que se enmienda. De acuerdo con estas mismas fuentes habría un número elevado de detenidos, se ha expulsado a diputados y dejado cesantes a numerosos funcionarios, entre los que se encuentra Josué de Castro, figura mundialmente conocida por sus escritos sobre el hambre.

La pregunta que debe hacerse frente a tal situación se ha repetido a menudo: ¿puede frenarse una dictadura de izquierda con una dictadura de derecha? Esta pregunta divide a muchos católicos y no católicos. Y divide especialmente a los democráticos. Para algunos no hay manera de defenderse de la insidia y habilidad de los comunistas si no es por la fuerza y por la implantación de un verdadero régimen policial, que en poco se diferencia del estado policiaco comunista. Para otros, es necesari-

rio dejar actuar libremente al comunismo para mostrar claramente sus fallas, y sin descuidar el realizar una intensa propaganda y acción democráticas que permita mostrar, en la teoría y en la práctica las ventajas de un régimen de libertad.

En el caso Brasil encontramos una realidad más profunda que es necesario aclarar. Este país, como el nuestro, tiene un problema fundamental de democratizar su propia vida política. En nuestra historia la ley Sáenz Peña y el peronismo marcan las dos etapas de esa democratización. Por la primera, la pequeña burguesía, surgida especialmente de la segunda generación de inmigrantes llegó al poder dirigida por un hombre entroncado en lo más rancio del federalismo. Por el segundo, las clases trabajadoras, del campo y de la industria, se sintieron representadas por un hombre que se apoyó en ellas, les concedió ventajas, pero que no pudo, finalmente, escapar a su genio demagógico y ególatra. Estas dos etapas argentinas realizadas con una diferencia de tiempo aceptable, no provocaron situaciones demasiado violentas. El acceso de las clases inferiores al gobierno fue ayudado por una alfabetización y una movilidad social muy grandes.

En Brasil, el movimiento burgués estuvo encarnado en Vargas y tuvo su éxito que, finalmente, sin embargo, causó la muerte de su propio abanderado. Goulart ha pretendido realizar la segunda etapa sin que, pensamos nosotros, se den las condiciones favorables. El primer hecho en contra de los deseos de Goulart

lo da la misma analfabetización de extensas clases populares en el Brasil. Veinte millones de analfabetos son algo muy difícil de digerir en el orden social y más en el orden político. El segundo hecho en contra, lo da la presencia de una mentalidad comunista que pretendía aprovechar este movimiento de neto tipo populista. Por eso esta reforma no podía hacerse si no con mucho cuidado y prudencia por parte de los dirigentes responsables y especialmente del mismo Goulart. Pero se ha visto que no era el hombre para la situación. Por eso ha caído. Pero, ¿comprenderán los que han provocado su caída que no basta eliminar a un hombre y a su grupo para resolver los problemas que éstos no habían creado? Las masas brasileñas no podrán quedarse satisfechas de un sistema de orden que implique mantenerlas en su condición de indigencia material y educacional. La tarea principal del actual gobierno y del que lo suceda no consiste en perseguir a los que se aprovechan de los problemas sociales para explotarlos demagógicamente, sino en resolver las graves condiciones populares.

Frente a esta situación la actitud de la Iglesia y de sus hombres aparecerá hasta contradictoria. Muchos Obispos se habían pronunciado en favor de la reforma agraria de Goulart, que en sí misma era bastante modesta. Pero no se han pronunciado sobre las reformas po-

líticas y no creemos que lo hagan. Por otra parte, los obispos brasileños tienen conciencia de la presencia de un comunismo muy activo y con gran influjo aun en las mismas filas católicas más avanzadas. Pero la Iglesia no puede ver con indiferencia que gran número de sus hijos sufra condiciones de vida infra-humanas y por el tanto, apoyará todas las reformas necesarias, de estructuras y de posiciones, para su solución. Quedará en la prudencia de cada obispo el juzgar que es lo más urgente o lo más necesario: si frenar el comunismo o trabajar en las reformas. Por eso habrá declaraciones a favor de un mayor control de la labor comunista y otras en favor de una mayor rapidez en las reformas sociales.

Brasil, el país católico más grande del mundo se encuentra ante una grave encrucijada de su historia. América y especialmente América latina no puede ver con indiferencia su futuro. Pero Brasil no se salvará del comunismo si no es a través de una fuerte transformación que satisfaga las exigencias de la doctrina social de la Iglesia. Esto es lo que esperamos de las mejores capacidades de nuestros vecinos y especialmente de sus ciudadanos y dirigentes católicos. Esto es lo que, en su reciente declaración, al tomar posesión el nuevo presidente, han pedido los Obispos brasileños. ♦

el sindicalismo cristiano latinoamericano

A menudo se preguntan los católicos qué ha hecho o qué hace la Iglesia en el campo social. En primer lugar, y conviene una vez más repetirlo, la Iglesia son todos los católicos y no meramente los obispos y sacerdotes. Por lo tanto la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué hacemos los

católicos en el campo social?, porque eso será lo que hace la Iglesia.

Por otra parte, hay una tendencia, bien fomentada por el comunismo, de que la Iglesia especialmente en América latina siempre ha estado de acuerdo con las clases poderosas y pudientes. Fácil sería destacar que nuestros países se

constituyeron con una mentalidad laicista liberal, contraria al influjo de la Iglesia en los terrenos sociales y políticos y que por lo tanto, la situación político-social de nuestros países se estructuró despreciando lo que la Iglesia podía proponer en ese terreno. Baste recordar en nuestro país la ofensiva liberal laicista que pretendió negar a la Iglesia y a las familias sus derechos sobre la educación de los propios hijos y esto no sólo en el nivel primario, sino también en el universitario donde realmente se forman las mentalidades que van a actuar en el terreno social. Por eso se puede afirmar con toda verdad, que la Iglesia no ha tenido ninguna influencia en la estructuración del actual régimen social-político latinoamericano porque los principales dirigentes le fueron siempre adversos. Como un ejemplo de que cuando el dirigente es católico se logran reformas aun políticas en favor del pueblo, podemos señalar en nuestro propio país el caso del Dr. Indalecio Gómez, defensor como ministro del Interior de la ley Sáenz Peña del sufragio universal, y hombre de rancia formación católica.

La Iglesia ante esta situación tuvo que conformarse con una evangelización catequética y una defensa de la moral familiar que más lentamente ha comenzado, sin embargo, a dar ya sus frutos en todos los campos, ayudada especialmente por el movimiento de Acción Católica, surgido en todos los países latinoamericanos después del año 1930.

Uno de los campos en que este esfuerzo se muestra más pujante es precisamente en el orden sindical. Existe ya una poderosa organización latinoamericana denominada CLASC: Confederación L. de Sindicalistas Cristianos y que cuenta con federaciones en veintidós comunidades políticas de nuestro continente. Ninguna otra orientación ha conseguido tener una difusión tan completa en nuestra América y su importancia acrece si tenemos en cuenta que en la mayoría de estos países junto al sector industrial encontramos movimientos gre-

miales dentro del campesinado, especialmente en Colombia, Ecuador y Chile.

El sindicalismo latinoamericano, cristiano o no, se encuentra ante la grave coyuntura de que es imposible luchar por los intereses gremiales sin tener que abarcar al mismo tiempo, problemas políticos no sólo dentro del mismo país sino en la dimensión continental.

Muchas de las empresas en las que la lucha sindical debe librarse se encuentran comprometidas con intereses extranjeros, especialmente norteamericanos y no siempre estos han comprendido la gravedad de la situación autóctona. El sindicalismo cristiano además, halla la oposición de la regional sindical dependiente de la central mundial de sindicatos socialistas a la que están adheridos los sindicatos norteamericanos que apoyan entonces un sindicalismo amarillo que colabora con los intereses del país del norte.

De este modo se ha producido un complejo de circunstancias por las que los sindicatos cristianos han llegado a la conclusión de que no se podrá realizar la promoción de los trabajadores si no es a través de un apoyo a la unificación de América latina que le permita enfrentarse a los distintos centros de decisión económicos mundiales. De allí la importancia de un documento dado a conocer el 11 de marzo del corriente año, aprobado en el VII Consejo Latinoamericano de la CLASC y celebrado en Río de Janeiro. El documento denominado Carta de Río de Janeiro establece la posición de los trabajadores ante el proceso de unificación de América latina.

Reconoce ante todo dos realidades: la atomización que representan veintidós repúblicas y aisladas y diversos territorios incapaces por sí mismos de satisfacer "las necesidades individuales de nuestras naciones y las esperanzas colectivas de nuestros pueblos"; y que en el mundo actual se van dejando atrás la política de bloques imperialistas para agruparse las naciones en organizaciones regionales muy definidas.

América Latina se encuentra en retra-

so ante esta segunda realidad y es necesario apresurarse. Entre los factores que han impedido esta unificación regional latinoamericana el documento señala especialmente la interferencia de los intereses norteamericanos. Además de sus efectos en el campo político, militar y económico, la CLASC denuncia expresamente la política de la ORIT en el terreno sindical, como parte de ese predominio. Frente a esta realidad la CLASC afirma que "el destino de América latina está en manos de los latinoamericanos"... y que la primera alianza que es necesario establecer es entre los propios latinoamericanos. No es posible esperar que las soluciones vengan de afuera.

Para lograr y consolidar la realidad latinoamericana propone la CLASC la creación de la Organización de los Estados Latinoamericanos, el Consejo Económico y Social de América Latina, apoyar la constitución de un Parlamento continental, favorecer la creación de empresas latinoamericanas, y finalmente promover la formación del Frente Sindical Latinoamericano al servicio de la unificación y la revolución latinoamericanas.

Como se ve, un programa que tiene mucho de político pero al que se ha llegado a través de la constatación de que

sin esas transformaciones políticas poco se podrá hacer en los otros campos constantemente frustrados desde las posiciones públicas. Por otra parte, la misma existencia de una fuerte organización sindical orienta las mismas mentalidades políticas hacia soluciones afines.

El realismo del sindicalismo cristiano se hace cada vez más evidente y así lo han entendido muchos obreros que sin vivir personalmente de la fe cristiana han encontrado en él la solución más aceptable en el campo de las relaciones laborales.

Esperemos que la ceguera de los dirigentes empresariales y políticos no sea tanta como para no ver que ante un mundo amenazado por la inactividad liberal y el activismo comunista no existe otra solución que la acción realista y franca basada en los principios del solidarismo cristiano.

La importancia del esfuerzo del sindicalismo ha sido reconocido últimamente por los obispos brasileños que al señalar la urgencia de reformas inspiradas en un sano concepto social y cristiano elogian a los verdaderos dirigentes cristianos que luchan en los gremios, especialmente aquellos de los sectores rurales y exhortan al nuevo presidente a promover un sindicalismo auténtico. ♦

religión y política

LA Legislatura de la Provincia de Córdoba derogó el Decreto-Ley N° 928 de la última Intervención Federal que regulaba el funcionamiento de los institutos privados de enseñanza y a tambor batiente sancionó la Ley N° 4.733 que reemplaza a aquel instrumento legal.

Tales hechos han conmovido a la opinión pública de aquella provincia y de todo el país. La Iglesia ha salido en de-

fensa de sus propios derechos docentes y de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Los Obispos han dado una Pastoral y han hecho conocer distintos documentos sobre el asunto; las Asociaciones de Padres de Familia y las distintas organizaciones por la libertad de la enseñanza han hecho oír sus protestas por las medidas adoptadas y los católicos cordobeses —que en las últimas elecciones votaron a los

que actualmente ejercen el poder— se han alineado atrás de su Obispo.

El partido político gobernante en la provincia dio, a través de los presidentes de sus comités, apoyo y defensa al Gobierno.

Hasta aquí los hechos acaecidos en los últimos días. La opinión pública del país ha tomado, prácticamente, partido en este asunto, lo que para nosotros es un síntoma realmente favorable.

¿Qué significaba el derogado Decreto-Ley 928? Esta ley reguladora de la educación fija los precisos y justos límites que tiene el Estado en su función jurídica de proteger los legítimos e imprescriptibles derechos docentes de la Iglesia y de la familia y los del niño a recibir una educación integral; reglamenta las funciones que competen a cada uno y determina los funcionarios y organismos encargados de aplicar la ley y la forma de hacerlo. En rigor de verdad, un magnífico instrumento legal no solamente un precioso fruto de un extraordinario equipo docente sino consecuencia y resultado de una larga y dura lucha por recuperar la perdida libertad de enseñanza y consecuentemente el derecho a la enseñanza religiosa. Un documento equilibrado ordenado al bien común que *"consiste en la paz y seguridad de que las familias y cada uno de los individuos pueden gozar en el ejercicio de sus derechos y a la vez, en el mayor bienestar espiritual y material que sea posible en la vida presente, mediante la unión y coordinación de la actividad de todos. Loble es, pues, la función de la autoridad que reside en el Estado: proteger y promover, y no absorber a la familia o suplantarla"*. (Enc. De la educación cristiana de la juventud).

La Ley 4.733 reproduce en su sibilino lenguaje toda la legislación docente liberal y masónica sancionada en el país desde la ley nacional 934, llamada paradójicamente de "libertad de enseñanza" y desde la mitológicamente ley 1.420. Resurge el monopolio estatal por obra de liberales inconsecuentes con su propia

ideología; fieles a Rousseau y a Voltaire, reivindicán para el gobierno, en última instancia, una educación que depende únicamente del Estado. Dos citas de la misma ley nos permitirá filiar su carácter monopolizador y despótico. En el Art. 2º la ley 4.733 dice: *"El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos deberá asegurar la formación integral del hombre argentino conforme a los valores morales e históricos tradicionalmente reconocidos"*. Como se ve claramente aquí nada se dice y menos se afirma sobre el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, porque afirmar que debe asegurar la formación integral del hombre argentino no quiere decir nada de lo que se pretende afirmar o más bien negar sin decirlo; por otra parte, ya sabemos de sobra lo que los liberales quieren decir cuando hablan de los valores morales e históricos tradicionalmente reconocidos, indudablemente no se refieren ni a la religión ni al estilo de vida que nos lega nuestra legítima tradición; para ellos lo tradicional es el liberalismo, que es extraño en nuestra Patria. Así que no nos llamemos a engaño con el ropaje con que se envuelven las ideas. En el Art. 3º la ley 4.733, dice, hablando de los establecimientos privados: *"...podrá darse sus propios programas analíticos y sus métodos didácticos, como sus reglamentos internos y establecer la distribución de turnos y horarios. A las materias obligatorias de estos planes y sin contrariarlos, podrá agregar con anuencia de los organismos respectivos las asignaturas que estime pertinentes"*. Aquí se han mostrado de cuerpo entero. Todo resume doblez. Para empezar el Estado, el gobierno, hace los programas y les da su contenido y orientación y los Colegios privados podrán ampliar o no esos mismos programas, pero no otros; lo que podrán darse sus propios métodos didácticos es verdaderamente ridículo. El plan de estudios de los diferentes grados y años lo fijará el Estado de acuerdo a la concepción positivista que todavía per-

dura en la legislación normalística argentina cuando en otros países hace 80 años se ha dejado de lado por inoperante y anacrónica. En ese plan no tendrán cabida ni la Religión ni las humanidades, porque contrarían a dicho plan según lo determinen los organismos respectivos. Desde la sanción de la ley 1.420 ya sabemos lo que todo esto quiere decir.

Todos los otros artículos, que se refieren minuciosamente a los múltiples aspectos que planteó el funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, estén redactados en la misma forma: todo el control, toda la decisión se la reserva el Estado, como si ello fuera garantía de patriotismo y sabiduría. Y cuando los artículos dejan un resquicio, ese es para que por ahí se introduzca una disposición reglamentaria que servirá para afirmar este tiránico ejercicio del poder. Desde la época de Roca no se ha actuado en otra forma.

Se quiere actuar en la misma forma, pero los tiempos han cambiado y no será ello posible.

Nosotros tenemos derecho a preguntarnos: ¿Qué quiere, qué pretende el gobierno de Córdoba y el radicalismo del pueblo con la sanción de la ley 4.733? Si es el cumplimiento inexorable de su catálogo electoral, como dicen sus hombres de comités, nos parece tonto que por esa accidental circunstancia arreme-

tan contra la libertad de enseñanza, contra los derechos de la Iglesia y de las familias tan luego ellos que se llenaban la boca tiempo atrás hablando de derechos y libertades por el mero y circunstancial hecho de que detentan el poder. O es que se quiere ensayar una nueva gimnasia revolucionaria, con un planteamiento dialéctico como la que se organizó en 1958 alrededor del artículo 28 y este asunto de Córdoba no sería más que parte de un plan más vasto, destinado en última instancia, a implantar una fuerte educación laicista en todo el país y particularmente en el ámbito federal?

Cualquiera sea la razón de esta actitud, todo indica que se trata de la parte de un plan de lucha contra la Iglesia y la Religión y los católicos debemos estar dispuestos y listos a defender nuestros principios y nuestros derechos de padres de familia y de católicos. La destructora acción que emanará de la ley 4.733 no se va aminorar con una reglamentación complaciente o con las buenas palabras y ensayos de disculpas de algunos. No hay más que una sola manera de arreglo: la derogación de la ley 4.733 por injusta y tiránica, porque viola los derechos de la familia y de la Iglesia y porque niega la libertad de enseñanza contenida en la Constitución de la Provincia y en la de la Nación. ♦